

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Codrós Paz y Hermano, Puente del Rey número 6 a 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera, franco de porte.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Codrós Paz y Hermano, Puente del Rey número 6 a 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera, franco de porte.

PARTE OFICIAL

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina, nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su imponente salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria de Negocios.

Remitido a informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Aoiz para procesar a D. Gabriel Ibañez, Alcalde de Larrañaga, ha concluido lo siguiente:

Excmo. Sr. Esta Sección ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Navarra ha pedido al Juez de primera instancia de Aoiz la autorización que solicitó para procesar a Don Gabriel Ibañez, Alcalde de Larrañaga.

Resulta que denunciado contra dicho Alcalde varios hechos abusivos, el ilustrado Jefe de la Sección judicial sobre los mismos pidió por el Juzgado autorización al Gobernador para continuar el procedimiento respecto de los delitos de usurpación de atribuciones y malversación de fondos imputados a dicho Alcalde.

Que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, concedió la autorización en cuanto al primero de los mencionados delitos, y la negó respecto del segundo, ó sea la malversación de fondos. Fundase la negativa en que si bien afirman varios testigos que el Alcalde Don Gabriel Ibañez no ha dado cuenta de la suma de 426 frs. que recibió en 1858, tampoco ha dado cuenta de la suma de 100 frs. que recibió en 1859, y que, por tanto, a los bienes del común, como quiera que el interesado, al dar sus descargos, ha manifestado que no había un fructo de su cuenta por lo que no había sido finalizado el año en que ha de ser elevado de la Alcaldía, el Gobernador consideró que en este caso, previa cuya decisión compete a la Administración como Jefe de la Sección judicial, y aprobar las cuentas de los fondos que ad-

ministran los Ayuntamientos; facultad que, además de hallarse consignada en las disposiciones generales vigentes, está reservada en Navarra a la Diputación provincial por los artículos 6.º y 10.º de la ley de 16 de agosto de 1841:

Vistos los escritos que se citan de la mencionada ley, según los cuales las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la Administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial con arreglo a su especial legislación, teniendo dicha Diputación facultad para la Administración de los productos de propios, rentas, arbitrios y propiedades de los pueblos, las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino;

Considerando que respecto del delito de malversación de fondos públicos imputado al Alcalde D. Gabriel Ibañez, solo consta una denuncia particular confirmada por los testigos de referencia, lo cual no es bastante para suponer la realidad de la malversación, puesto que no habiendo rendido con sus cuentas el Alcalde no ha recibido por la Administración la resolución competente sobre las mismas; circunstancia indispensable para que este negocio pudiese pasar a la esfera judicial en el sentido solicitado por el Juzgado de Aoiz;

La Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Navarra, y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1861.—Pasada: Herrero. Señor Gobernador de la provincia de Navarra.

(Gaceta de 11 del actual.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Málaga y el Juez de primera instancia del distrito de Santo Domingo de su capital, de los cuales resulta:

Que en 23 de junio de 1851 se despachó ejecución a instancia de los Capellanes de la villa del Carpio contra D. Cosme Escobar y Asenjo, como marido de Doña Josefina López Espinosa de los Menteros, para pago de réditos atrasados, desde San Juan de 1819, de un censo

afecto a cargas espirituales a favor de la obra pía fundada por D. García de Toledo, Obispo, que fue de Córdoba, a que resultaba especialmente obligada la hacienda Cerrado de Cea, de la pertenencia de la expresada señora, reconviniendo sentencia de remate en 27 de abril de 1855.

Que siguiendo el procedimiento adelante, la parte demandada, previa protesta de repetir devolución, consignó 20,000 rs. para pago de réditos y costas, que le facilitó D. Bartolomé Domínguez Ramos a condición de que se había de subrogar a éste en el derecho y grado de los ejecutantes, a consecuencia de lo cual se hizo pago a los Capellanes en 18 de marzo de 1857.

Que continuadas las actuaciones, y vendida la finca judicialmente en pública subasta a petición de Domínguez para hacerse pago de los indicados 20,000 reales, se aprobó el remate en 28 de octubre del propio año a favor de D. Miguel Calzado, quien lo cedió en D. Martín Heredia, entrando éste en la posesión de la finca, previo lanzamiento de Don Cosme Escobar Asenjo, y mandándose por el Juez en auto de 26 de mayo de 1859 que concurrese Escobar y su consorte dentro de tercero día a otorgar la escritura de venta, y que no verificándolo se otorgase judicialmente.

Que entretanto había acudido D. Cosme Escobar y Asenjo al Gobernador de la provincia de Málaga, pidiendo con arreglo a la ley de 1.º de Mayo de 1855, la redención del censo de que se trata en 17 de Julio del propio año de 1855, tomándose razón en las oficinas correspondientes de esta instancia, y dirigió diferentes reclamaciones a una de ellas al Ministerio de Gracia y Justicia contra los procedimientos judiciales que se lanzaban, y varias al Gobernador de la provincia para que requiriese al Juez de inhibición en la ejecución por atrasos que era debían obrarse por la Administración; todo lo cual dió por definitivo resultado que la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado aprobase la redención del censo, capitalizándolo en 16,500 rs. en 30 de Noviembre de 1858, y que el Gobernador de la provincia requiriese al Juez de inhibición en 28 de Mayo último, entablándose en forma la presente competencia, en que el Gobernador sostiene que la cuestión corresponde a la Junta de Venta; y que condenados los atrasos por el art. 7.º de la ley de 27 de Febrero de 1856, faltaría a los capellanes del Carpio personalidad para continuar la ejecución tan luego como el censatario se presentó a redimir gubernativamente el gravamen; y el Juez de- liendo su jurisdicción asentada que el

inicio ejecutivo quedó ejecutoriado desde que la sentencia de remate causó ejecutoria, y es por tanto improcedente la competencia conforme al Real decreto de 4 de Junio de 1847.

Vista la ley de 1.º de Mayo de 1855, en cuyo art. 7.º se concedió a los censatarios el plazo de seis meses para redimir los censos que se vendían con arreglo a esta ley, y en cuyo art. 11 se expresó que se perdonaban los atrasos que adeudasen los censatarios, ya procediesen de que no se hubieran reclamado en los cinco últimos años, ya de ser los censos desconocidos, dudosos, ó ya por cualquier otra causa, con tal de que se confesasen deudores de los capitales ó sus réditos.

Vista la instrucción de 31 de Mayo de 1855, que en su art. 96, párrafos octavo y noveno, dispone que entenderá la Junta de Ventas en la resolución de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas, censos ó sus redenciones, y resolverá ó consultará al Gobierno, dando su dictamen, cuantas dudas le ocurran y las resoluciones que estén fuera de sus atribuciones, y en su art. 222 dispone que recibiéndolo que fuere por el Gobernador de la provincia la instancia de un censatario sobre redención de censos habría de pasarla al Comisionado y a la Contaduría, al primero para que tomase razón de ella, y al segundo para que procediese a la liquidación.

Vista la Real orden de 20 de Octubre de 1855 mandando al Director general de Ventas de Bienes nacionales que, hasta tanto que se sancionase la ley sobre redención de los censos comprendidos en la de 1.º de Mayo citada, se suspendiera todo procedimiento contra los censatarios por los descubiertos en que se encuentran de sus respectivos censos.

Visto el art. 7.º de la ley de 27 de Febrero de 1856, en que se condenaron todos los atrasos de réditos a los censatarios y demás pagadores de gravámenes desamortizados que adeudasen más de las tres anualidades, contando desde 1.º de Mayo de 1855; entendiéndose este precepto la obligación de redimir respecto a los censatarios de censos conocidos, y con la de redimir ó de reconocer el capital obligándose a pagar los réditos sucesivos tocante a los de censos dudosos ó ignorados, todo dentro del plazo de seis meses, prorogable a otros seis por el Gobierno; y habiendo de considerarse dudosos para el indicado objeto aquellos que no hubiesen pagado los réditos ni se les hubiesen reclamado, ya judicial, ya gubernativamente en los cinco últimos años venidos hasta el expresado 1.º de Mayo.

Vistos los Reales decretos de 25 de Setiembre y 14 de Octubre de 1855 declarando en suspenso la venta de bienes del clero secular devueltos al mismo por la ley de 5 de Abril de 1855, y suspendiendo tambien la ejecucion de la ley de 1.º de Mayo de 1855 para que no se sacara á pública subasta finca alguna de las que esta ley ordenaba poner en venta, ni se aprobasen las que se hallaran pendientes.

Visto lo Real orden aclaratoria de 12 de Noviembre de 1856, que dispone en su art. 1.º que no se consideren comprendidos en los efectos de la suspension de la venta de los bienes del clero secular, dispuesta por el expresado Real decreto de 25 de Setiembre del mismo año, las redenciones de censo ó otra cualquiera prestacion de las que percibía el clero secular, siempre que los expedientes de mayor cuantía resultasen aprobados por la Junta superior de Ventas hasta la indicada fecha de 25 de Setiembre, y los de menor cuantía por las provinciales hasta el 27 de Julio de dicho año, y en su art. 2.º que tampoco se consideren comprendidos en los efectos del Real decreto de 14 de Octubre de referido año las subastas y redenciones de censos, con tal que los expedientes hubiesen sido aprobados por la Junta superior antes del 15 y por las de las provincias antes del 19 del mencionado Octubre.

Visto el Real decreto de 21 de Agosto de 1860, que dispone que la Junta superior de Ventas de Bienes nacionales y las de provincia procederán respectivamente á la aprobacion de los expedientes de redencion de censos eclesiásticos que se hallasen pendientes al expedirse el Real decreto de 25 de Setiembre de 1855.

Visto el art. 3.º párrafo tercero del Real decreto de 4 de Junio de 1847, que prohíbe á los Jefes políticos (hoy Gobernadores) suscribir contienda de competencia en los pleitos leuados por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Considerando:

1.º Que la cuestion relativa á si la redencion de censo de que se trata, solicitada en 17 de Julio de 1853, lleva envuelta la conguarion de atrasos del propio censo, es una incidencia de la misma redencion de las que corresponde conocer á la Autoridad administrativa, con arreglo al art. 9.º de la Instruccion de 31 de Mayo de 1855 y el art. 14 del Real decreto de 21 de Agosto de 1860 en su lugar citadas.

2.º Que la sentencia de remate de 27 de Abril de 1853 respecto al pago de atrasos no es de las ejecutorias de que habla el art. 5.º tambien referido del Real decreto de 4 de Junio de 1847, porque con ella no ha fenecido el negocio, y antes queda abierta su continuacion en juicio ordinario.

Conformidad con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno.

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á 25 de Diciembre de 1861.—Esta rubricado de la Real mano.

El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

(Gaceta de 13 del actual.)

MINISTERIO DE ESTADO.

El Excmo. Sr. Ministro plenipotenciario de S. M. en Londres dice al Excmo. Sr. Ministro de Estado en telegráma fecha de ayer lo que sigue:

«Los periódicos de hoy publican noticias de la Habana recibidas via de Nueva York. El vapor Francisco de Asis llegó á la Habana el 23 de Diciembre, y por él se sabía que iban tonado V. racruz por las tropas impetuosas, el General Gasset se ha ocupado la ciudad y el castillo de San Juan de Ulua.

El Diario de la Marina dice que, negros tropas fueron recibidas por la municipalidad y los habitantes: el General Gasset habia dado una proclama declarando que no iba á conquistar, sino á obtener el cumplimiento de los tratados. El General Prim llegó á la Habana el 25 y fué recibido con el mayor entusiasmo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de Manizales para procesar á D. Juan Maria Martinez, Alcalde de Pinar, y á José Gomez, guarda de campo de la misma municipalidad, ha consultado lo siguiente:

«Esta Seccion ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Granada ha negado al Juez de primera instancia de Manizales la autorizacion que ha solicitado para procesar á D. Juan Maria Martinez, Alcalde de Pinar, y á José Gomez, guarda de campo de la misma municipalidad.

Resulta que á consecuencia de denuncia del Promotor fiscal de Manizales se le trayeron diligencias judiciales para averiguar si el Alcalde y guarda expresados habian cobrado á varios vecinos algunas cantidades en metálico por razon de indemnizacion de daños causados por animales en los sembrados ó terrenos del distrito municipal de Pinar.

Que en efecto resultó haber tenido lugar diferentes exacciones que exigía el guarda de orden del Alcalde á los dueños de los animales que eran aprehendidos en terreno ajeno, cuyas cantidades percibía el guarda en concepto de sobresueldo, además de la pensión de 4 rs. diarios que se le habian asignado.

Que de las actuaciones practicadas aparece tambien que el Alcalde, siguiendo una antigua costumbre, convocó una junta de hacendados y contribuyentes, y les propuso el establecimiento de un guarda que vigilara los sembrados y cercados, y para hacer menos costoso el sostenimiento de dicho guarda, convinieron todos los concurrentes en que aquel exigiese un real por cada animal ó caballería mayor, y medio por las menores, si eran cogidos de dia, doblando la cantidad si fuese por la noche la aprehension.

Que dicho acuerdo no se sometió á la aprobacion del Gobernador, porque los que en él intervinieron creyeron obrar como particulares interesados en una medida de conveniencia general, y en su virtud quedó establecido el guarda en Marzo último, desde cuya fecha comenzaron á hacerse efectivos los exacciones sin forma de juicio, ni registro, ni resguardo de ninguna clase.

Que en vista de tales datos, el Juzgado, de acuerdo con el Promotor fiscal, pidió autorizacion para procesar á los dos mencionados Alcalde y guarda por el delito de exacciones ilegales de que aparecian responsables.

Que el Gobernador, despues de oír los descargos de los interesados, quienes disculpáron su conducta con el acuerdo celebrado por la junta de vecinos contribuyentes de Pinar, de que queda hecho mérito, negó la autorizacion, de conformidad con el Consejo provincial fundándose en que las cantidades exigidas por el Alcalde para pago de un guarda no tuvieron carácter de pena segun lo declarado en Real orden de 15 de Julio de 1851; que el guarda percibió el dinero por su trabajo y el alguacil por sus citas, sin que conste que el Alcalde se lucrara por ningun concepto; y por último, que el Alcalde siguió una costumbre inmemorial en el pueblo, y obra dentro de sus atribuciones en materia de policia rural.

Considerando que pre-cindiendo de la legalidad con que el Alcalde y guarda mencionados hayan procedido al exigir cantidades pecuniarias en concepto de indemnizacion de daños y en virtud de acuerdo anteriormente adoptado por el Ayuntamiento y contribuyentes del pueblo, como quiera que ambos funcionarios obraron de buena fé y siguiendo una costumbre inmemorial de aquella municipalidad, circunstancia que en el presente caso excluye la presuncion general de la intencion de delinquir.

La Seccion opina debe confirmarse la negativa del Gobernador y lo acordó.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Seccion, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1861.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Granada.

(Gaceta de 16 del actual.)

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Se recomienda á los Ayuntamientos de la provincia la adquisicion del Manual instructivo de Contabilidad municipal.

Administracion.—Negociado 3.º

Por el Ministerio de la Gobernacion se me comunica con fecha 24 de Diciembre último que el Real orden de 21 de Agosto de 1860.

Habiendo acudido á este Ministerio D. Alfonso Lopez, oficial del Consejo provincial de Guadalajara, representando manuscrito un tratado que titula Manual instructivo de Contabilidad municipal, en que se propone facilitar la inteligencia de la legislacion vigente en la materia, acompañando al efecto 22 modelos de la documentacion mas esencial que exige la administracion de los fondos de los pueblos, y solicitando que de reconocerse útil, se recomendase su adquisicion á los Ayuntamientos del Reino, la Reina (Q. D. G.) considerando que la indicada obra ajustada á las reglas y principios establecidos, puede ser consultada con provecho por las municipalidades, ha tenido á bien mandar la de V. S. á conocer en el Boletín oficial de la provincia, á fin de que cuando el autor la imprima y publique, la adquieran los Ayuntamientos si lo juzgan conveniente, comprendiendo su coste en sus respectivos presupuestos como gasto voluntario.

Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernacion, digo á V. S. para su inteligencia y efectos expresados.

Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial á los efectos prevenidos. Orense 18 de Enero de 1862.—Francisco Javier Camuño.

SECCION DE FOMENTO.

CIRCULAR NUM 26.

Se publica la nómina de los dueños á quienes se ocupan fuerza con la construccion de la carretera de Ribadavia al Carballino en la parroquia del Baron.

A continuacion se publica la nómina de los dueños á quienes se ocupan fincas con el trazado definitivo de Ribadavia al Carballino, en términos de este último Ayuntamiento y parroquia del Baron, señalando el plazo de quince dias para que puedan producir sus reclamaciones los interesados, incluso aquellos que por una omision involuntaria no figuren comprendidos.

NÓMINA QUE SE CITA.

D. Francisco Losada de Gomariz. La viuda de D. Segundo Pimentel. D. José Valeiras de Carballino.

D. Carlos Gonzalez Pereira, de M. de los. Agustín Vazquez, de Dadin.

D. Francisco Antonio de Castro, de Dozon.

Herederos de Baltasar Alemparte, de Cabanillas.

Idem de D. Joaquin Ulloa ó quien represente por él.

Luis Diaz de San Blodio.

D. Justo Reinoso, de Orense.

Herederos de Luis Gonzalez, de Orense.

Manuela Rodriguez viuda, de id.

Luis Gonzalez Otero, de id.

Manuela Vazquez viuda, de id.

D. Ramon Villarino, de id.

Andrés Alvarez, de id.

Antonio Alvarez, de id.

Bernardo Soto, de id.

Vicente Fernandez, de id.

Catalina Rodriguez, de id.

D. Juan Manuel Vazquez, de id.

Pedro Gomez, de id.

Bernita Gonzalez, de id.

Juan de Chao, de id.

Ildefonso Perez, de id.

Rosendo Campos, de id.

Rosa Soto Otero, de id.

Diego Diaz, de id.

Miguel Diaz, de id.

Luis Maria Gonzalez, de id.

Damaso Vazquez, de id.

Juan Gonzalez Otero, de id.

Orense 15 de Enero de 1862.—Francisco Javier Camuño.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA

Comision de evaluo y repartimiento de la contribucion territorial de Orense.

Finalizado el repartimiento de inmuebles, cultivo y ganaderia del año actual, correspondiente al distrito de esta ciudad, estará expuesto al público desde el dia veintitres al treinta del corriente mes en la puerta de la Administracion principal de Hacienda de la provincia, á fin de que los contribuyentes, así vecinos como forasteros comprendidos en el mismo, puedan enterarse

de las copias que les han sido impuestas, y aducir sus reclamaciones los que se crean agravados; á cuyo efecto deben tener presente que el capital imponible de los primeros sale gravado con 17 rs. 66 céntos por 100, y el de los segundos con 16 rs. y 36 céntos.

Orense 21 de enero de 1862.—
El Presidente, J. Reinoso.

En la portería de esta Administración principal se expenden á 4 reales ejemplares, intercambiados á la rúbrica del Real decreto de 12 de setiembre último é instrucción alterando las clases del papel sellado.
Orense 17 de enero de 1862.—
J. Reinoso.

CONTADURÍA

DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.

Los Ayuntamientos de la provincia que á continuación se expresan, pueden desde luego por medio de persona debidamente autorizada recoger de la Tesorería de Hacienda pública de la misma, las cartas de pago de los depósitos constituidos á su favor en el mes de diciembre último en la Caja sucursal por los compradores de los bienes propios de los pueblos, por la tercera parte del 80 por 100, cuyo importe les queda abonado en cuenta corriente.

Abion.
Baños de Molgas.
Cea.
Ginzo.
Reiro.
Muinos.
Verea.

Orense 19 de enero de 1862.—
José Manso.

JUNTA PROVINCIAL
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Para que los maestros de escuelas públicas no se ausenten del punto de su residencia sin la correspondiente licencia.

Estando prohibido á los maestros de escuelas públicas, el ausentarse del punto de su residencia sin la competente autorización, y observando esta Junta provincial la frecuencia con que muchos de ellos lo verifican con notable perjuicio de la enseñanza, presentándose en días de clase en diferentes pueblos, con especialidad en esta capital, con objeto de evacuar asuntos, ya propios, ya ajenos, sin la correspondiente licencia, ha acordado que los Sres. Alcaldes hagan saber á los de sus respectivos distritos la responsabilidad en que incurren si llegan á ausentarse prescindiendo de dicho requisito, y que está dispuesta á no consentir ni tolerar el mas leve abuso en esta parte.

Orense 20 de enero de 1862.—
E. G. P., Francisco Javier Camuño,
—P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Saavedra, secretario.

Estado del precio medio que han tenido en dicha provincia los artículos de consumo que á continuación se expresan, en la segunda quincena del mes de la fecha.

PROVINCIA DE ORENSE.

Sección de Fomento.

HECHURA Y PESO DE CASTILLA.

REDUCCIÓN AL SISTEMA METRICO DECIMAL.

Pueblos	GRANOS.				CARNES.		CALDOS.		PAJA.	
	Trigo.	Cent.	Maiz.	Garba.	Arroz.	Graba.	Arroz.	Graba.	Arroz.	Graba.
Albariz.	49.57	29.32	23.20	55.50	58	55	57.72	70	0.85	0.88
Bande.	50	30	24	56	59	56	58	71	0.86	0.89
Carballino.	50	31	25	57	60	57	59	72	0.87	0.90
Celanova.	50	32	26	58	61	58	60	73	0.88	0.91
Ginzo.	50	33	27	59	62	59	61	74	0.89	0.92
Orense.	50	34	28	60	63	60	62	75	0.90	0.93
Ribadavia.	50	35	29	61	64	61	63	76	0.91	0.94
Trives.	50	36	30	62	65	62	64	77	0.92	0.95
Valdeorras.	50	37	31	63	66	63	65	78	0.93	0.96
Vorin.	50	38	32	64	67	64	66	79	0.94	0.97
Viana.	50	39	33	65	68	65	67	80	0.95	0.98
Precio medio.	50.28	34.28	33.90	60.50	63	60	63	81	0.96	0.99

TERCERA SECCION.

Juzgado de primera instancia de Entrambasaguas.

Don Anselmo Garcia Serantes, Juez de primera instancia del partido de Entrambasaguas en la provincia de Santander.—
Al Sr. Gobernador civil, Jueces de primera instancia, Alcaldes constitucionales, Comandantes de la Guardia civil y demas dependientes de vigilancia pública de la provincia de Orense.—Hago saber que en la causa que se instruye en este juzgado por testimonio del suscritor, escriban, contra Gabriel Antonio Torar, natural de Córdoba y Francisco Blanco Diaz, natural de Parada de Santa Cristina en Orense; conignados del destacamento presdial de Santoña, donde se fugaron de las obras de fortificación de esta plaza el 30 de diciembre último, quebrantando condena por este delito; he dispuesto entre otras se proceda á su busca, captura, prision y conduccion con las seguridades convenientes á disposicion de este juzgado. Y en su consecuencia para que tenga efecto, he acordado expedir la presente requisitoria con la que de parte de S. M. la Reina (Q. D. G.) cuya jurisdiccion ejerzo, exorto y requiero á V. SS. y de la mia les ruego, que tan luego como llegue á su conocimiento se sirva darle cumplimiento y mandar ejecutar, procediendo á la busca y prision de dichos reos; teniendo en tendido que las señas del primero son 21 años de edad, natural de Córdoba, de oficio sombrerero, estado soltero, pelo y cejas negro, ojos pardos, nariz ancha, boca regular, barba lampiña, color moreno, estatura 4 pies y 9 pulgadas, señas particulares una cicatriz en la frente; las del Francisco Blanco, natural de Parada de Santa Cristina en Orense, partido de Trives; su edad 33 años, tratante, soltero, pelo y cejas castaño oscuro, ojos claros, nariz regular, barba poca, cara redonda, color sano, estatura alta; visten los dos de uniforme presidario, y conseguida su prision los hagan conducir á mi disposicion con la debida seguridad, pues en así hacerlo cumplirán un deber de justicia y yo haré la misma á sus iguales en justa correspondencia.

Dado en Entrambasaguas á 8 de enero de 1862.—Anselmo Garcia Serantes—
Por su mandado, Joaquín Cobo.

Idem de Sequeros.

D. Ramon Rodriguez Valerías, Juez de primera instancia de esta villa de Sequeros y su partido, provincia de Salamanca.—
Con motivo del fallecimiento intestado de Andrés de Bouza, soltero, natural de Gollpellas, distrito municipal de Calbos de Randin, provincia de Orense; cuya defuncion tuvo lugar en S. Esteban de la Sierra en este partido en 14 de diciembre de 1837 sin herederos conocidos, habiéndose insertado por término de treinta dias en el Boletín oficial de esa provincia, un edicto llamando herederos ó á los que se creyesen con derecho á la repitida herencia, y como nadie se haya presentado á reclamarla hasta el dia, pasado el expediente al Promotor fiscal solicitó y se estimó en esta fecha reproducir nuevo edicto por término de veinte dias á fin de que por sí ó por persona con poder bastante, comparezcan los herederos ó acreedores que se crean con derecho á los bienes dejados por el Andrés de Bouza; aperribidos que de no comparecer en dicho término les parara el perjuicio que haya lugar.

Dado en Sequeros á 11 de enero de 1862.—Ramon Rodriguez Valerías.—
José Secillano.

Idem de Corcubion.

Don Bernardo Genton y Alvarez, juez de primera instancia de este partido etc.—
Por el presente se llama, cita y em-

